

# Crisis estatal y muchedumbre

Álvaro García Linera\*

\* *Matemático  
e investigador social.  
Docente de la carrera  
de Sociología  
y de la Maestría  
en Ciencias Políticas  
en la Universidad Mayor  
de San Andrés,  
La Paz, Bolivia.*

---

Se ha dicho que todo Estado es el monopolio tanto de la coerción física legítima como de la violencia simbólica. Esto significa que el Estado es una continua producción de creencias e ilusiones bien fundadas, como la de la pertenencia a una "comunidad política" territorializada, la obediencia a la ley, el acatamiento a las decisiones tomadas por determinadas personas denominadas "autoridad", etc. La legitimidad es aquí la naturalización y somnolencia colectivas respecto a unas arbitrariedades, unas pruebas de fuerza que impusieron unos recortes de soberanía específicos sobre el territorio o unos criterios particulares de grupo como ley. En tal sentido, la legitimidad encarnada por el Estado reposa sobre violencias olvidadas y, en tanto eso, consagradas y reproducidas como si no fueran imposiciones. El Estado es, por tanto, una continua *eufemización* de un fondo histórico violento y no en vano ha de monopolizar precisamente la administración de la violencia física imaginada como necesaria para proteger la vida en común.

Por ello, cuando el Estado duda de sus monopolios ante la impronta política de una sociedad desbordante, como ahora viene sucediendo en Bolivia, estamos ante el fin de una forma estatal que, al aceptar un policentrismo de principios de autoridad, ha extraviado la voluntad racionalizada de un poder que sólo podrá ser restaurado mediante la consagración de nuevos discursos de credibilidad gubernativa, nuevas composiciones de fuerzas con capacidad de dirección social y nuevas instituciones que articulen el escenario político. Al fin y al cabo, los estados son modos, exitosos, fallidos o mutilados, de condensación social, y de ello depende su gelatinosidad, perennidad o inestabilidad.

### **Las fases de la crisis estatal**

En el caso de Bolivia, está ya por demás claro que el actual Estado neoliberal, al menos en la forma en que lo hemos conocido hasta ahora, está atravesando un proceso de acelerada declinación y agotamiento. El primer momento de este desgaste sistémico se inició en el año 2000, cuando la emisión de creencias conservadoras que garantizaban el consenso social respecto a las líneas maestras de las políticas públicas (gobernabilidad, privatizaciones, libre mercado) fue interpelada e incluso retrocedió frente a otras ofertas discursivas de organización económica y política alternativas (comunitarismo, autogobierno indígena, estatización, autogestión). Esto afectó el régimen de creencias movilizadoras de la sociedad, descentrando el campo discursivo en múltiples nodos emisores, y dando inicio al ocaso de la certidumbre moral del Estado.

Un segundo momento de la crisis vino a partir de septiembre de 2000, posteriormente ratificado en julio de 2001 y febrero de 2002, cuando el monopolio estatal de las decisiones políticas y de la coerción física comenzó a resquebrajarse.

Desde entonces, y de manera recurrente, sistemas organizativos locales no estatales de administración del poder (los cabildos, los comités de huelga, las federaciones campesinas coaligadas) y de la violencia legítima (comités de autodefensa, cuartel indígena de Q'alachaca), asentados en sindicatos y comunidades del altiplano norte y el trópico, han emergido públicamente y tienen amplia aceptación en esas regiones.

Es cierto que la actuación del Estado en muchas zonas es débil o simplemente existe por la presencia de algún regimiento militar. Precisamente, lo notable de la época actual es que pese a ello, o por ello, la sociedad está comenzando a producir instituciones colectivas de coerción y mando que han canalizado decisiones sociales y la imposición relativa de esas determinaciones. Esto se puede denominar como la coexistencia jerarquizada de dos campos políticos portadores de dos lógicas de soberanía contrapuestas. El Estado está viviendo un cerco de principios de estatalidad que no son los suyos y que

***“La fuerza de la  
muchedumbre  
radica en su  
capacidad de decir  
no, esto es, de  
resistir, de oponerse,  
de destruir; pero a la  
vez, acabada su  
tarea, se repliega, se  
disuelve en el  
anonimato de sus  
intereses.”***

marcan la potencialidad proactiva de movimientos sociales que portan proyectos de reforma estatal.

Y éste es justamente el antecedente inmediato del último síntoma de la crisis estatal: el enfrentamiento armado entre instituciones coercitivas del Estado el 12 y 13 de febrero pasados.

Durante veinticuatro horas, y a raíz de un motín policial, tropas del Ejército y la Policía, respaldadas por civiles, se enfrentaron con armas de fuego en las inmediaciones de la casa de gobierno y el parlamento en la ciudad de La Paz. Que las organizaciones estatales usen armas para defender su monopolio contra sectores que desconocen este privilegio es algo esperable de un Estado que se precie de tal; pero que las instituciones armadas del Estado usen las armas para detener las pretensiones autónomas de otras instituciones armadas del Estado habla de un derrumbe catastrófico del principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo así como el instinto de preservación básico de cualquier organización social. El Estado no puede comenzar a aniquilarse a sí mismo de manera impune, a no ser que, por senilidad histórica o extravío de la razón, haya abandonado las ganas de existir, que es lo que pareciera estar sucediendo cuando vemos a militares y policías matarse a balazos en las calles.

Para que esto pudiera acontecer, hay que tomar en cuenta los efectos de la crisis estatal en el almacén institucional del Estado. Desde el año 2000, la sociedad ha experimentado movilizaciones exitosas, de las que la Policía y el Ejército han salido por lo general desmoralizadas por la imposibilidad de cumplir la misión asignada por el gobierno, que es precisamente la de desmovilizar a los insurgentes movimientos sociales. Que cada conflicto social acabe no con una capitulación de los líderes sindicales sino con una nueva abdicación de autoridad del gobierno no puede menos que generar un sentimiento colectivo de tropa derrotada tanto en el Ejército como en la Policía. Por otro lado, los límites financieros del modelo neoliberal han converti-

do los impuestos sobre el salario en uno de los últimos recursos para ampliar los ingresos fiscales de un Estado en bancarrota; y dado que los policías son el sector laboral peor pagado de la administración pública, no es raro que se trate de una organización permeada por la querrela social en torno al excedente, que es justamente el reclamo inicial que condujo a la tropa antidisturbios de la Policía a amotinarse en febrero y a encontrar apoyo en la población asalariada urbana que iba a ser afectada con un nuevo impuesto del 12,5% sobre el líquido pagable.

En todo este escenario, ciertamente hubo algo así como una memoria institucional de confrontación que se remonta a la revolución de 1952, cuando en la misma ciudad de La Paz la Policía se puso del lado de la plebe insurrecta para derrotar al Ejército. En los años '90, esta conflictividad se desplegó en torno a la administración de los recursos norteamericanos de interdicción contra el narcotráfico, que inicialmente favorecieron a la policía y después, cuando el Ejército incursiona en acciones antinarcóticos, quedó en manos de las FF.AA.

Sin embargo, hubo impulsos que cuestionaron la propia institución y la continuidad estructural de su memoria. En los hechos, entre el 12 y 13 de febrero un mayor mandaba a un general, un cabo o suboficial se colocaba al frente de un capitán, en tanto que todos, sin excepción, desconocían la autoridad civil de los ministros y el presidente. La cadena de mandos y jerarquías que garantizan la cohesión del Estado, y con ello la verosimilitud de su continuidad, comenzó a quebrarse a medida que los policías muertos eran recogidos por sus camaradas. Con las horas, el sentido de autoridad en el mismo Estado se diluía replegándose a su núcleo íntimo y final: las Fuerzas Armadas. De este modo, la legitimidad democrática yacía tendida frente a unas tanquetas convertidas en el último y más seguro refugio de la autoridad presidencial.

### **El cierre social del Estado**

Si bien este colapso temporal del sistema de mandos y jerarquías en la institucionalidad estatal fue el primer elemento que caracterizó esta nueva etapa de la crisis estatal, un segundo componente relevante emergente en febrero fue el derrumbe general de la autoridad ante la población urbana de La Paz y El Alto, y el resurgimiento simultáneo de una forma de acción colectiva correspondiente a este desplome general de la autoridad estatal y social, que denominaremos *muchedumbre*.

Esto significa que toda crisis estatal general produce a su modo procesos de auto-agregación social cuya expansión, densidad y eficacia acompañan a cada una de las etapas de esa crisis. En Bolivia, en los últimos tres años, la crisis estatal ha generado distintas

formas de autoorganización de las clases subalternas. La primera etapa catapultó a la forma *multitud* como sujeto colectivo organizado. Su éxito y eficacia como forma de acción colectiva se sostuvieron sobre sus estructuras flexibles, capaces de articular a diversas organizaciones locales territoriales y no territoriales en torno a una política de necesidades vitales. A su



vez, la crisis de septiembre fue producida por los sistemas comunales del mundo campesino-indígena, que lograron ensamblar una estructura mayor de movilización regional dando lugar a una gigantesca maquinaria indígena de guerra capaz de conquistar caminos, agotar al ejército y asediar ciudades.

En el caso del reciente amotinamiento civil de febrero de 2003 en la ciudad de La Paz, Cochabamba y en menor medida Santa Cruz, el sujeto colectivo que se estructuró y movilizó con una ferocidad sorprendente ha sido la muchedumbre.

En la movilización de febrero, y una vez iniciado el enfrentamiento entre policías y militares, varios miles de personas comenzaron a aglutinarse en torno a la plaza principal, custodiada por los militares, y al cuartel de los policías amotinados. En una especie de articulación de memoria colectiva (la vieja alianza entre policías y plebe frente al ejército) y cercanía social (la tropa policía está compuesta por sectores urbano-populares en gran parte de procedencia indígena), una parte de la población movilizada comenzó a apoyar a los policías que se enfrentaban en desigual combate con armamento policial (lanzagases, pistolas y algunas carabinas) contra las tropas militares leales que resguardaban la casa de gobierno portando armamento de guerra (fusiles automáticos, ametralladoras pesadas, bazucas, miras telescópicas y helicópteros). Otro grupo de la población, en cambio, auto-convocado, pues no hubo ninguna proclama ni llamado público, comenzó a formar un círculo en torno a las calles de acceso a la plaza Murillo, convertida en el epicentro del conflicto, y tomó la iniciativa de actuar por su cuenta. Una parte de ella se dirigirá al Ministerio de Trabajo y le prenderá fuego; posteriormente pasarán por la Vicepresidencia para quemar el edificio y, más hacia la noche, por otros ministerios, casas de los partidos políticos oficialistas y, al final, una vez que el número de muertos hubo roto la economía moral de tolerancias y excesos entre sociedad y Estado, las ofici-

nas de empresas de servicios básicos privatizadas, incluida la fábrica de cerveza. En la noche, en la ciudad aldeaña de El Alto, miles de personas quemaron las oficinas de cobranza de los servicios básicos (agua, electricidad), la alcaldía en manos de uno de los partidos de gobierno, la aduana y sucursales bancarias. En la ciudad de La Paz, grupos más reducidos comenzaron a asaltar las tiendas comerciales lujosas del centro para, al finalizar la noche, dirigirse a los locales comerciales de abasto popular en las zonas altas de la ciudad donde los vecinos levantaron barricadas para cuidar los vecindarios de las amenazas de saqueo y del ingreso de las tanquetas militares.

Durante horas, a la cabeza de una masa de jóvenes provenientes de los más disímiles oficios, todos los sistemas previos de autoridad, tanto estatal como social, se resquebrajaron, dando paso a un actor colectivo portador de una intencionalidad política claramente manifiesta en la quema simbólica de los edificios del poder estatal y de las privatizaciones.

En la constitución de este sujeto urbano, no fueron ni los sindicatos, ni las comunidades, ni los gremios, ni siquiera los vecinos, los que dieron lugar a esas masas plebeyas que se descolgaron hacia las calles, edificios gubernamentales y comercios urbanos. Esto supondría una organización de organizaciones previamente constituidas, que no fue el caso.

Quienes se movilizaron fueron personas que carecen de una filiación organizativa primordial, y que por tanto son capaces de actuar de manera electiva en torno a un objetivo sin rendir cuentas a nadie, sin seguir a nadie y sin tener ningún comportamiento que no emanara de su criterio individual, de sus expectativas individuales, de sus angustias e intereses personales.

Estas personas, carentes de lazos normativos y de anclajes colectivos, son fruto de procesos de modernización bastardeados en la medida en que han dejado atrás las filiaciones colectivas tradicionales de la comunidad y el gremio, pero a la vez no han interiorizado las pautas de la ciudadanía corporativa (el sindicato de asalariados) ni la ética del contribuyente (impuesto a cambio de servicios sociales) propios de la modernidad exitosa.

La muchedumbre es la manifestación colectiva de una individuación vaciada, de un desarraigo de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin más meta que el sobrevivir a como dé lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de individuos provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie, ni al sindicato, ni al gremio ni a la junta de vecinos, y mucho menos a un Estado que los ha abandonado a su suerte o sólo existe para *exaccionarlos*. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el cierre a cualquier ascenso social planificable, y están presentes tanto en Los Ángeles como en El Alto, en Caracas como Buenos Aires, en La Paz o Santa Cruz.

Como está asentada en contingentes y volátiles organizaciones previas, la muchedumbre se gatilla por lo general por alguna indignación moral que rompe la barrera de lo tolerable o por vacíos de poder que habilitan la apuesta a la obtención de algún beneficio material particular mediante el uso de la fuerza de masa. Sin embargo, al menos en el caso de Bolivia, este amontonamiento de individualidades está marcado por un tipo de politización, tal vez heredado del pasado sindical y comunal o por influencia de movimientos sociales activos. De ahí que el saqueo, acción típica de la muchedumbre moderna, se combine acá con el asalto a edificios públicos que simbolizan la materialidad del poder arbitrario, en tanto que la quema posterior pareciera exorcizar la presencia de ese poder.

La fuerza de la muchedumbre radica en su capacidad de decir *no*, esto es, de resistir, de oponerse, de destruir; pero a la vez, acabada su tarea, se repliega, se disuelve en el anonimato de sus intereses. Expresa un malestar pero, a diferencia de la forma multitud, de la forma comunidad y la forma sindicato, no abraza vías de resolución de la indignación ni las formas organizativas para alcanzarlas.

Y sin embargo, la muchedumbre está ahí y nuevamente estará ahí como forma descubierta de la presencia de amplísimos segmentos sociales urbanos disconformes con lo existente y portadores de una ambigüedad política. Son una ineludible fuerza de choque contra el Estado, pero también, simultáneamente, de generación de sentimientos conservadores en sectores urbanos identificados en torno al miedo a perder los réditos de su mediana propiedad. Con todo, la muchedumbre, nuevo sujeto social del movimiento social urbano, es también un catalizador de las polarizaciones entre grupos estatales y entre segmentos sociales que pareciera caracterizan a la siguiente etapa de la crisis estatal general que tarde o temprano tendrá que resolverse en la estructuración de una nueva forma estatal capaz de sintetizar a la sociedad.